

Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En autos Rit O-969-2020, Ruc 2040028145-9, del Juzgado del Trabajo de Antofagasta, don Walter Juan Cabezas Pastenes interpuso demanda en procedimiento de aplicación general de declaración de nulidad del despido, despido injustificado, cobro de prestaciones y declaración de único empleador en contra de Silvio Christian Cuevas Suárez, Cuevas Constructora e Inmobiliaria Spa, Cuevas Constructora e Ingeniería Ltda. y solidariamente contra el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional, acogándose la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones, por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en contra de Silvio Christian Cuevas Suárez, y declarándose que las demandadas principales constituyen un solo empleador para fines laborales y previsionales; asimismo, se hizo lugar a la demanda de subcontratación en contra de las demandadas solidarias, condenando en definitiva al pago de la indemnización sustitutiva por falta del aviso previo, por años de servicio más el recargo legal, remuneraciones adeudadas, feriado proporcional y horas extras. Hizo lugar a la demanda por nulidad del despido, debiendo concurrir todas las demandadas de forma solidaria. Hizo lugar a la excepción de pago interpuesta por Silvio Cuevas Suárez por la suma de 218.000.- pesos, rechazando el resto de las excepciones opuestas.

En contra del pronunciamiento de instancia, la parte demandada del Gobierno Regional, dedujo recurso de nulidad, el que fue desestimado por una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta mediante fallo de cuatro de abril de dos mil veintitrés.

En contra de esta última resolución, la misma parte presentó recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que se acoja y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, con arreglo a la ley.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio *«existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia»*. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones referentes al asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.



Segundo: Que la recurrente propone como materia de derecho objeto del juicio, la *«aplicación del artículo 183 A- del CT, esto es, entender que el Gobierno Regional tiene la calidad de empresa principal y en consecuencia que se declare la existencia del régimen de subcontratación, en atención al vínculo que antecede, entre el Gobierno Regional, (en su calidad de mandante y rol de financista) y el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección Regional de Arquitectura, quien actúa como mandataria y unidad técnica, siendo esta última relación celebrada bajo el contexto del artículo 16 inciso cuarto de la Ley N°18.091»*.

Tercero: Que refiere que en el presente caso se debe concluir que no había régimen de subcontratación, al no configurarse los requisitos para ello.

Para dicho efecto, cita el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en los antecedentes rol N°2.745-2021.

El fallo de cotejo por su parte, resolvió que: *«...la Ilustre Municipalidad de Conchalí y el Gobierno Regional Metropolitano celebran un convenio mandato completo e irrevocable bajo lo regulado en el artículo 16 inciso cuarto de la ley N°18.091, quedando en el presente caso el Gobierno Regional Metropolitano, como “mandante” y financista del proyecto denominado “Mejoramiento Centro Deportivo Balneario Municipal Comuna de Conchalí. Por su parte, la Municipalidad de Conchalí, asume el rol de “mandataria” y unidad técnica, siendo esta última quien suscribe el acuerdo contractual con la empresa contratista “Constructora OCM SpA»*.

Agrega el fallo que *«...el Estado no es ajeno a las modalidades relacionadas con la tercerización, en el sentido que –bajo determinadas condiciones-, en lugar de lleva a cabo por sí mismo ciertas actividades, puede acudir a la utilización de trabajadores de terceros, por la vía de contratar suministros o bien la prestación de servicios tales como la vigilancia o aseo de sus instalaciones e, inclusive, la ejecución de obras, que ciertamente contribuyen al cumplimiento de sus tareas. Empero, para llegar, en el caso concreto, a la conclusión de la existencia de un régimen de subcontratación, es cuestión previa establecer si se dan los elementos característicos de dicha forma de vinculación laboral, a saber: i) existencia de una relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra - contratista – que, en definitiva, es el empleador del trabajador subcontratado; ii) que entre la empresa principal y la contratista exista un acuerdo, de carácter civil o mercantil, conforme al cual ésta desarrolla para aquélla la obra o servicio que motivó el contrato; iii) que las labores sean ejecutadas dependencias de la empresa principal, o fuera de las instalaciones o espacios físicos del dueño de la obra, conservando la empresa mandante el control y dirección de las labores desarrolladas; iv) que la obra o el servicio sea*



continuo, lo que denota habitualidad e ininterrupción en la ejecución de la prestación; v) que las labores sean desarrolladas por cuenta y riesgo por la contratista o subcontratista; y, vi) que el trabajador sea subordinado dependiente de su empleador, contratista o subcontratista;

(...) Que la situación que se plantea en la especie no da cuenta de los elementos propios de un régimen de subcontratación reseñados más arriba. Por el contrario, corresponde a la situación de un servicio público que pura y simplemente -y en cumplimiento de un mandato constitucional de equidad territorial – debe destinar fondos o asignar financiamiento para el perfeccionamiento de programas o acciones que fomenten el desarrollo social, económico y cultural de la región (artículo 16 letras b) y c) de la ley N°19.175 en relación con los artículos 69 letra f) 74 y 77 del mismo texto legal, en su redacción a la fecha de suscripción del convenio mandato tantas veces aludido). Tan cierto es lo que se destaca que el propio artículo 16 ya citado define como funciones generales del gobierno regional el “resolver” la inversión de los recursos correspondientes en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sin entregarle la “ejecución” de las obras de inversión que se requieran (letra b), a diferencia, por ejemplo, de la labor que le asigna en la letra j) de la misma disposición, que le encomienda “construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la ley de presupuestos.

De esta forma, un análisis armónico de las disposiciones que reglan tanto la inversión del Fondo Regional de Desarrollo Regional y los convenios mandatos, así como el clausulado particular del convenio mandato específico, las bases de licitación y el contrato de obra, permite arribar a la conclusión de que no se encuentra entre las funciones propias del Gobierno Regional la ejecución directa de obras de inversión regional, sino tan solo su asignación de financiamiento.

(...) Que, de este modo, el caso en examen se estrecha con el corazón de la contratación. Acá no se trata de una hipótesis en que la dueña de una “obra, empresa o faena” encargue a un tercero la ejecución de un servicio o de una obra que forme parte de su operación regular o que esté relacionado con ella, sino que implica la mera administración y subsecuencia traspaso de fondos del erario nacional. Aun si quisiera prescindirse de la naturaleza administrativa de la vinculación que une al servicio público con el adjudicatario de los recursos, la aceptación de la tesis de los actores significaría distorsionar el instituto de la contratación o subcontratación, transformando una garantía legal en una especie de seguro estatal.



(...) Que, en este contexto, cabe concluir que al declarar el fallo impugnado la responsabilidad solidaria del recurrente el Gobierno Regional Metropolitano, ha incurrido en una equivocada interpretación del art. 16 de la ley 18.091, que a su vez condujo a una errónea aplicación de la preceptiva relativa a la subcontratación laboral a un caso no contemplado en la ley, de manera que procede invalidar en esta parte la sentencia recurrida».

Cuarto: Por otra parte, en el caso en estudio, la sentencia recurrida al resolver el recurso de nulidad interpuesto al alero de las causales del artículo 478 letra e) y 477 del Código del Trabajo, consideró que: *«...conforme a los hechos fijados por el tribunal, fue el Gobierno Regional quien decidió y priorizó la ejecución de la obra en que se desempeñó el trabajador y, si bien, la licitación fue ejecutada por la Dirección Regional de Arquitectura, lo hizo como mandataria del Gobierno Regional, quien, en todo caso, solo delegó parcialmente el desarrollo de la obra pues se reservó su ejecución financiera, el derecho de intervenir directamente en el proceso de contratación pública, al tener la facultad designar funcionarios de su dependencia para participar en la apertura de la propuesta y, además, la potestad de intervenir directamente en la ejecución de la obra fiscalizando, en cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones de la Unidad Técnica, como visitando las obras cuando lo determinara.*

Luego actuando la Dirección Regional de Arquitectura como mandataria, debe entenderse que actuó, conforme lo dispone el artículo 2.116 del Código Civil, por cuenta y riesgo del Gobierno Regional y, por tanto, radicándole los efectos del acto, sin perjuicio que, como se vio, también participó directamente en el proyecto al conservar su ejecución financiera y potestades fiscalizadoras.

Consiguientemente, claramente cae dentro del concepto de empresa principal o mandante previsto en el artículo 183-A del Código del Trabajo, pues era la dueña de la obra, sin perjuicio de su destino público, financió directamente su ejecución, sin perjuicio de delegar, mediante un mandato, los aspectos técnicos administrativos y constructivos de su ejecución, pero reservándose la facultad de fiscalización tanto de la actuación de la mandataria como de la empresa empleadora.

Sin perjuicio de ello, resulta evidente que si el Gobierno Regional se reservó la ejecución financiera del proyecto y potestades fiscalizadoras, no puede pretender que la Dirección Regional de Arquitectura actuara a propio nombre pues ello deja sin explicación su propia intervención en la ejecución de las obras.

(...) Que tampoco puede estimarse infringido el artículo 16 de la Ley N°18.091.

Dicha norma, ya transcrita al reseñar el recurso de nulidad, referida a los



mandatos de ejecución técnica de proyectos entre órganos de la Administración, en parte alguna altera los efectos propios del mandato, encargándose de regular ciertos aspectos administrativos financieros involucrados, quedando claro que es el mandante el encargado y responsable de la ejecución financiera de los proyectos, lo que conforme lo señalado en el considerando que precede, no hace más que confirmar la responsabilidad que le compete como empresa principal, dueña de la obra, respecto de las obligaciones laborales que la empresa empleadora tenga para con los trabajadores que las desarrollan materialmente».

Quinto: Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

Sexto: Que, para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere verificar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente comparables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen de la concurrencia de los requisitos enunciados precedentemente, tal exigencia no aparece cumplida en la especie, desde que aquella planteada en autos no es posible de equiparar con la del fallo que ha servido de sustento al recurso en análisis, pues se advierte que en el presente caso, se estimaron concurrentes los supuestos propios de un régimen de subcontratación, esencialmente aquellos referidos a la intervención directa en el desarrollo de la obra, al reservarse el derecho de participar en el proceso de contratación pública, tener la facultad de designar funcionarios de su dependencia para participar en la apertura de la propuesta y la potestad de intervención en la ejecución de la faena, fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones de la unidad técnica, y visitando las obras, elementos no acreditados en el fallo de cotejo.

Octavo: Que, como se puede advertir, queda de manifiesto que el fallo



acompañado no contiene una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelve en base a circunstancias fácticas diversas a aquéllas planteadas y establecidas en la resolución aquí impugnada, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso 2° del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 483 a 484 del Código antes citado, se **rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada solidaria en contra de la sentencia dictada con fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Regístrese y devuélvase.

Rol 68.694-2023

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., ministra suplente señora Dobra Lusic N., y los abogados integrantes señora Carolina Coppo D., y señor Gonzalo Ruz L. No firman los abogados integrantes señor Ruz y señora Coppo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por ambos haber cesado en sus funciones. Santiago, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

